

Las elecciones mexicanas del 2 de julio de 2006 o la crónica de los fracasos múltiples

por Juan Abal Medina*

Que a cuarenta y cuatro días de una elección presidencial aún no se conozca a ciencia cierta quién ha sido el candidato ganador habla a las claras de un fracaso político colectivo. Pero más aún si el proceso eleccionario ha tenido lugar en un país que, como México, creía haber entrado hace seis años en el terreno real de la democracia de partidos.

Después de casi setenta años de funcionamiento de un sistema de partido único -que como gustaba decir a los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), había sido más longevo que el soviético, con el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS)- las elecciones presidenciales de 2000 parecieron marcar la entrada de México al universo de las democracias pluralistas.

La victoria del candidato opositor, Vicente Fox, y de su agrupación, el Partido Acción Nacional (PAN), en unos comicios considerados, tanto en México como en el exterior del país, como ejemplares, mostraron a un Estado que parecía haber logrado exitosamente concluir su transición a la democracia; con un oficialismo que abandonaba pacíficamente el poder después de ejercerlo durante décadas y una arquitectura institucional electoral, que había hecho posible ese resultado.

En ese contexto, el Instituto Federal Electoral, IFE, logró la aprobación de todos, con un órgano de conducción "ciudadanizado", compuesto por personalidades y académicos independientes propuestos por el Congreso, con un control total sobre el proceso eleccionario. El prestigio de este organismo creció aún más en la medida en que continuó garantizando la transparencia electoral en las elecciones locales, llegando incluso a anular una importante elección a gobernador y debido a excesos en los gastos de campaña. Por otra parte, se cambió el procedimiento de calificación de la elección presidencial -hasta entonces en manos del Congreso- atribuyéndolo al Tribunal Electoral Federal, que se convertía así en el juez de última instancia de los procesos electorales nacionales.

Pero esta mirada exclusivamente formal no daba cuenta de que, más allá de las apariencias, no se estaba produciendo en ese México de 2000 un cambio real. En efecto, el elenco de ejecutivos del sector privado con el que Fox llegó a la presidencia hizo una verdadera profesión de fe con el continuismo de las políticas económicas del ex presidente Ernesto Zedillo, e incluso la estratégica Secretaría de Hacienda (equivalente a nuestro Ministerio de Economía) y la dirección del Banco de México quedaron en las mismas manos. En este continuismo esencial -confirmado en estos meses por el pase al PAN de los que fueron secretarios de Gobernación, Energía y Comercio de Zedillo- puede buscarse la explicación de esa aparente transición exitosa y sin sobresaltos.

Hacia mediados de la década, el proceso parecía dirigirse a concluir en una de las transiciones democráticas más exitosas de la historia. Especialmente por los sondeos previos que asignaban al postulante del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, enormes chances de convertirse en el nuevo presidente mexicano; logrando así, en muy pocos años, una alternancia envidiable en el gobierno PRI-PAN-PRD.

Sin embargo, el fuerte encono que generó esa candidatura en amplios sectores sociales de

clase media y alta y el mal manejo que de esta situación hizo el gobierno foxista, llevaron a una radicalización del proceso. En principio, López Obrador -aunque de manera confusa- planteó una ruptura con las políticas neoliberales llevadas adelante por las administraciones anteriores. Además, a mediados del año pasado, el presidente Fox, acompañado por la mayoría de los priístas, intentó sacar a López Obrador de la competencia, promoviendo su desafuero por el Congreso con el pretexto de un supuesto delito de desacato (incumplimiento de una orden judicial) en que habría incurrido. Al votarse y aprobarse el desafuero se produjo una masiva manifestación de perredistas que obligó al gobierno a dar marcha atrás, permitiendo con un nuevo pretexto jurídico que fuera candidato.

Lo anterior llevó a López Obrador al máximo de su popularidad, pero, al mismo tiempo, hizo irreconciliables los antagonismos políticos, que comenzaron a tomar un fuerte contenido de fractura social. Declaraciones torpes de López Obrador dieron pie para que la derecha empresarial -que controla la casi totalidad de los medios de comunicación- entrara de lleno en la lucha electoral, con una campaña que estimulaba los temores de las amplias capas medias frente a un supuesto candidato "a la izquierda de Chávez y de Fidel".

En ese clima, política y socialmente enrarecido, se llegó al 2 de julio. Los hechos ocurridos ese día mostraron que las debilidades del proceso político eran, finalmente, mucho más intensas que lo que los mismos actores podían recono-

cer, y que la impresión de normalidad institucional era simplemente eso: una mera impresión. De esta manera podemos entender el resultado de esta elección como la consecuencia de un conjunto de fracasos.

En primer lugar, la arquitectura institucional del país demostró ser, sin duda, obsoleta. Dejando incluso de lado las importantes sospechas de fraude y parcialidad de los comicios del mes de julio, lo cierto es que la regla de mayoría simple para la elección presidencial en un esquema político tripartidista mostró a las claras su ineficiencia; ya que no sólo hace difícil y polémica la elección, sino que, en cualquier caso, reiterará para los próximos seis años el caso de Fox: un presidente sumamente débil frente a un parlamento dividido en tercios.

En segundo lugar, junto con el fracaso del esquema institucional, otro dato objetivo de lo ocurrido fue el declive del propio IFE, que no sólo se terminó mostrando fuertemente parcial en el manejo de los datos sino que, como mínimo, toleró el desarrollo de un sinnúmero de irregularidades. Lo que, sumado a una conducta permanentemente proclive al oficialismo en todos los demás temas centrales en discusión (publicidades indebidas, por ejemplo), dejó a la "joya de la transición" fuertemente cuestionada.

A estos fracasos institucionales hay que sumar, al menos, otros tres fracasos políticos. Primero, el del mismo presidente Fox, quien no sólo no logró avanzar en sus proyectos de reformas ni garantizar un proceso de sucesión imparcial, sino que, inclusive, sufrió un fuerte descalabro cuando, al mejor estilo priísta quiso imponer a su sucesor, que resultó derrotado por Felipe Calderón, a quién Fox había expulsado del gabinete.

Segundo, la derrota del viejo partido de Estado, el PRI, que, a pesar de haber ganado muchas de las elecciones locales intermedias, recuperando varias gobernaciones clave para el partido, no logró resistir la polarización y sufrió la peor derrota de toda su historia, ocupando por primera vez en su prolongada existencia, el tercer lugar electoral.

Finalmente, la tercera derrota política fue, sin dudas, la de López Obrador, quien, después de haber ocupado durante muchos meses un primer lugar absoluto en las preferencias ciudadanas, a la hora de la verdad, y más allá de las especulaciones de fraude, obtuvo muchos menos votos de los previstos. En este caso, el candidato del PRD parece haber pagado un alto precio por haber relegado a los sectores tradicionales de la izquierda mexicana, incluso a su líder histórico, Cuauhtémoc Cárdenas, en beneficio de un núcleo político anteriormente cercano al ex presidente Salinas de Gortari, sector al que, inclusive, entregó el gobierno de la Ciudad de México. A lo anterior, hay que sumar el fuerte componente de despreocupación por lo institucional que el candidato siempre ha demostrado (con fuertes hechos de corrupción en su entorno más cercano), lo que, inteligentemente utilizado por el oficialismo y los grandes grupos empresarios, lo instaló como una especie de loco impredecible y desinteresado de la corrupción, en la voluble y nada politizada clase media mexicana.

Hacia delante, y más allá de los conflictos de las próximas semanas, probablemente tendremos un nuevo presidente débil, sin mayorías en las cámaras y, para colmo, enfrentado con la conducción de su propio partido, el PAN, que monopoliza la alianza entre sectores de la ultraderecha y el foxismo.

Lo único que abre una mínima expectativa favorable es la personalidad del posiblemente nuevo presidente Felipe Calderón. Calderón pertenece a una familia histórica del PAN y ha hecho una larga carrera en la política y no, como el actual elenco gobernante, en el mundo empresario. Asimismo, a pesar de su formación social cristiana, hace gala de una permanente búsqueda de diálogo y no oculta su intención de desprenderse de los elementos que rodearon a Fox –ejecutivos de multinacionales y ultras de organizaciones de extrema derecha como los legionarios de Cristo– y ha manifestado su intención de llegar a acuerdos con el PRD y el PRI, ofreciendo, incluso, la conformación de un gabinete plural. Por último,

en lo internacional y contradiciendo la política foxista postula reincorporar a México a América Latina, e incluso ha sostenido que piensa realizar su primer viaje, una vez que sea declarado presidente electo, al cono sur.

Con el margen de incertidumbre todavía existente, el futuro del país se muestra complicado. Habrá que esperar que el probablemente nuevo presidente pueda estar a la altura de las circunstancias y generar políticas de diálogo y consenso capaces de tomar las decisiones que el país requiere, desde una profunda reforma institucional hasta el cambio de una política económica de ultra ortodoxia neoliberal que ha generado, en casi veinte años de aplicación, una sociedad absolutamente fragmentada con la mayoría de la población cada vez más marginada. ^{CS}

** Profesor de Sistemas políticos comparados en la Carrera de Ciencia Política.*

